

EX SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SEGURIDAD

## RAFAEL VERA

«Un importante cargo del Gobierno ha prometido indultos a los inculpados del 'caso GAL' que han denunciado a sus superiores»

¿Se ve en la cárcel tras la petición fiscal de veintitrés años de reclusión por su implicación en el secuestro de Segundo Marey, el primer atentado reivindicado por los GAL?

Estaba convencido de que la calificación del fiscal José María Luzón iba a ser fuerte. Su actitud en las ocasiones en que he ido a declarar al Supremo me hacía suponer que su postura iba a ser dura e injusta. Hace tiempo que percibo una cierta animadversión del fiscal y también del Supremo contra José Barrionuevo y contra mí, luego no me extrañaría nada que esto acabe en una sentencia condenatoria.

Explíqueme lo de la animadversión porque me suena a acusación de prevaricación.

Lo entiende cualquiera que haya seguido un proceso que, pese al desinterés de la gente, lleva tres años en danza porque produce dividendos a políticos, a medios de comunicación y a una serie de personas que están en una operación de cambio bastardo y torticero del actual sistema político. Una operación que algunos consideran fantasma, pero que yo creo real.

Ya denunció la existencia de una conspiración cuando le imputó el juez Garzón, pero le recuerdo que les ha procesado un juez del Supremo, Eduardo Moner, y que ha sido un fis-

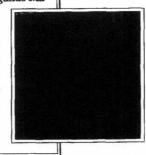
s, junto con el ex ministro José
Barrionuevo, el muro de contención del caso GAL que impide llegar a Felipe González. El fiscal acaba de pedir veintitrés años de cárcel para cada uno de ellos por el secuestro de Segundo Ma-

rey. Pese a ello, Vera se mantiene firme allí donde estaba, en su declaración de inocencia, y se defiende echando mano de la teoría de la conspiración, en la que implica al PP, y con duras acusaciones de animadversión contra el Supremo.

cal del Alto Tribunal, José María Luzón, quien pide su condena.

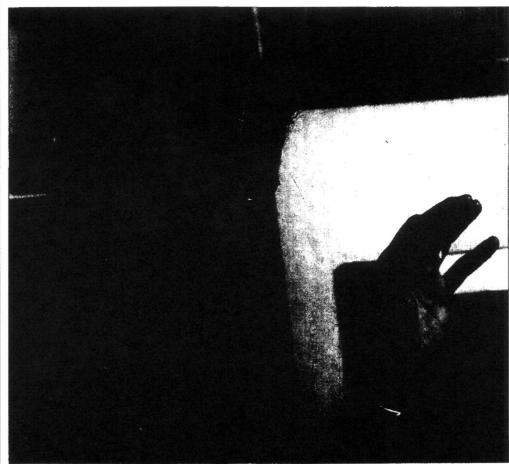
No quiero trasladar a la opinión pública la sensación de que me estoy cubriendo detrás de una conspiración y de que esto es una cortina de humo para eludir responsabilidades. Yo quisiera que se separasen las dos cosas: por un lado, los procesos judiciales, y por otro, todo lo demás, y todo lo demás es que hay personas que están utilizando el *caso GAL* para modificar el actual sistema de partidos e instaurar una república. Hay financieros en apuros, políticos y periodistas con influencia y ambición que piensan que el sistema po-

lítico actual es corrupto y que los partidos y sus líderes son mediocres y que ven que por el actual sistema no van a alcanzar el poder con facilidad. Hay también gente importante del PP que ha participado en la operación pensando que se podían aprovechar y que



Por CARLOS FONSECA Fotos: QUECA CAMPILLO





luego ya contribuirían a su desmantelamiento. Esto es un circo en el que el jefe de pista mañana hace de trapecista o de domador y viceversa.

Dígame quiénes son esos dirigentes importantes del PP que maquinan por la República.

A quienes están detrás de la conspiración ya los he denunciado más veces: el abogado Antonio García Trevijano, los jueces Joaquín Navarro y Javier Gómez de Liaño, los periodistas Pedro J. Ramírez y Jaime Campmany —que, por cierto, ahora que el tema está de actualidad en la Audiencia Nacional, llevó la imagen en Europa de la Junta Militar argentina en tiempos de Videla y Massera— y también el señor Mario Conde. Hay más gente detrás, pero no la voy a identificar de momento. Ya diré sus nombres más adelante o se encargarán de señalarlos otros que tienen más capacidad que yo.

Aunque fuera cierto que esas u otras personas estuvieran utilizando el «ca-

so GAL» en beneficio propio, eso no distorsiona la cuestión de fondo, que es determinar si la «guerra sucia» contra ETA se organizó desde el Gobierno socialista. Ése, y no otro, es el objetivo del procedimiento judicial en marcha.

Las circunstancias de que le hablo sí distorsionan el *caso GAL* porque se exagera, se manipula, se presiona a la gente, se la encarcela para cambiar voluntades y se di-

«El fiscal Luzón y el Supremo tienen animadversión contra José Barrionuevo y contra mí» fama a través de los medios de comunicación en otros temas paralelos para hacerlo más llevadero a la opinión pública. Todo esto crea un linchamiento añadido que permite multiplicar por cien un caso que de otra forma tendría un tratamiento distinto.

¿Tanto como para alcanzar al Tribunal Supremo?

Sí, hasta condicionarlo. Creo que ha habido presiones, sin duda. ¿O no estamos cansados de ver que los tribunales y los jueces a veces se dejan influenciar por la opinión pública? ¿Cuántas presiones ha habido en la Audiencia Nacional en el caso Lasa y Zabala hasta forzar el cambio de declaración del guardia civil Felipe Bayo? Lo que están haciendo es una especie de golpe encubierto, moderno. A finales del siglo XX y principios del XXI los golpes de Estado ya no hace falta darlos con militares y tanques en la calle, eso ya pasó.

José Barrionuevo ha dicho que está dispuesto a asumir todas las responsabilidades del «caso GAL» si se exonera al resto de procesados, pero al mismo tiempo dice que es inocente. Eso es contradictorio. ¿No sería necesario que primero asumiera que él organizó todo y que después dijera que el resto cumplió sus órdenes?

Pero, si no lo hizo, ¿para qué lo va a declarar?

Y si no lo hizo, ¿por qué asumir responsabilidades?

Es una oferta en el campo de lo político más que en el jurídico. Durante el periodo de instrucción del sumario estuvimos a punto de ir los dos a ver al juez Moner y decirle: mire usted, exonere a todos los funcionarios que están metidos en este proceso y nosotros asumimos las responsabilidades. ¿De qué? De este linchamiento, que es político, no jurídico. Concentren ustedes el tiro en nosotros y no vayan más abajo, porque si están yendo más abajo es para presionar, negociar y forzar a de-



terminadas personas a que culpen a sus superiores.

Dice que es una oferta política, ¿pero qué responsabilidad política van a asumir si ya no están en el Gobierno? Además, las responsabilidades políticas no lavan las judiciales.

Asumiríamos las responsabilidades que el juez nos reclamase. Eso en otros países, como Estados Unidos, se puede negociar. Puedes ser inocente, pero llegar a la conclusión de que, si quieres beneficiar a terceros, tienes que asumir el papel de culpable. Lo que ocurre es que después de consultar a los abogados llegamos a la conclusión de que chocamos con inconvenientes jurídicos y no es posible. Barrionuevo se ha limitado ahora a trasladar una reflexión que había hecho conmigo.

¿Serviría un reconocimiento público

de responsabilidades por parte de Felipe González para pasar página?

No porque hay gente que está dispuesta a acabar con el PSOE si es posible. La decisión de Felipe González de dar un paso al frente para acabar con esto—que sería injusta porque ni tiene que ver ni ha conocido ni ha sabido y, por tanto, poco puede decir al respecto— no valdría de nada. Ni ahora ni cuando fue presidente.

¿Cree que, si son condenados, el Partido Popular buscará alguna fórmula para evitar su ingreso en prisión?

Algunos pueden intentar tranquilizar su conciencia con eso. Yo sé que un muy importante cargo del Gobierno ha prometido medidas de gracia para los inculpados que, según él, han tomado el camino recto, que consiste en denunciar a sus superiores. Ésos tienen ganado el indulto.

¿Apoyaría una ley de punto final para el «caso GAL»?

Para la política, la ejecutoria y las decisiones que tomamos en nuestro paso por el Ministerio del Interior no sería justo

MALVERSACIÓN DE CAUDALES

DE COMBAN DE CAN PRES MUNICA PERDONA QUE

«La sociedad puede entender o tener un cierto grado de complicidad, sobre todo en aquellos años, con las actividades de 'guerra sucia', pero nunca perdona que un político se lleve el dînero. Lo han mezclado todo para que lo primero se digiriera mejor por la opinión pública y han intentado extender todo el asunto de los fondos reservados hasta el plano familiar. Hace poco nos acusaron a Corcuera y a mí de tener cuentas en Andorra y aquí tengo los certificados de los bancos que demuestran que ni nosotros ni nuestras mujeres tenemos ni hemos tenido cuentas allí».

nunca. Hemos hecho lo que debíamos y actuado dentro de la legalidad, en beneficio de la comunidad y buscando lo mejor para el asentamiento de los valores democráticos, y repito algo que digo en todas las entrevistas: el PSOE acabó con los GAL, con la guerra sucia contra ETA, no la empezó, y con esto no quiero decir que haya que extender la investigación a etapas anteriores.

Si usted no lo dice, sí que lo dicen Felipe González y algunos altos cargos de su partido. Me parece cínico intentar tapar responsabilidades propias, si es que existen, con las que puedan tener otros. Es tanto como decir: miren ustedes, nosotros hemos podido cometer crímenes, pero ustedes también y, por lo tanto, todos en paz.

Suponiendo, ¿eh?, que nosotros persiguiésemos eso, y eso le suena mal. ¿Por qué no le suena mal que el periodo que se está investigando o que se quiere investigar sea exclusivamente desde el año 82 al año 86 sabiendo, porque hay datos, que esos temas han estado ahí durante la Transición? ¿No es tan injusta una cosa como otra para un profesional de la información como usted? Dicho esto, le aseguro que no quiero que eso suceda, sólo pretendo que se investiguen los intereses bastardos que hay detrás del caso GAL y el comportamiento de la Justicia en este asunto desde el principio porque en un Estado democrático no importa sólo el fondo sino también las formas. Las garantías son muy importantes y aquí no se han respetado, y eso anula muchos procesos. Creo que a mí me van a dar la razón los tribunales de Estrasburgo porque hasta allí no llega, afortunadamente, la presión política.

El juicio del 1 de diciembre contra Mario Conde, a quien usted acusa de conspirador en este caso, ¿provocará novedades en el «caso GAL»?

Seguro. Puede haber intentos de citar como imputado a Felipe González, nuevos arrepentidos y testigos de cargo e incluso operaciones contra otras instituciones del Estado.